

Auto N°: AI-014
Proceso: Responsabilidad Civil
Demandante: Rosa Angélica Quintero García
Demandado: Darwin Alexis Vélez Ruiz y Otros.
Radicado: 05129 31 03 001 2020 00107 01
Asunto: Revoca auto apelado.
Tema: *Nulidad del artículo 121 del C.G.P cuando fue formulada por la parte interesada antes del proferimiento de la sentencia, y sin existir actuación posterior a su interposición que la convalide.*

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
-SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL-

Medellín, Veintisiete (27) de febrero del dos mil veinticuatro (2024).

Procede la Sala a proveer de mérito el recurso de apelación formulado a través de apoderado judicial por el demandante, en contra del auto de fecha 11 de mayo del 2023, proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Caldas, en el que se abstuvo de impartir trámite a la solicitud de nulidad, bajo el argumento que dicha petición acarrea mayor traumatismo si se tiene en cuenta que es el único juzgado que atiende la especialidad civil en esa municipalidad.

I. ANTECEDENTES.

1. Supuestos fácticos vinculados al presente caso. Como hechos relevantes con miras a desatar la alzada, se tiene que, en memorial del 07 de marzo del 2023, el apoderado de la parte actora solicitó al Despacho que declarara la pérdida de competencia en los términos del artículo 121 del C.G.P, porque ya había transcurrido 1 año desde la recepción del correo electrónico en que se surtió la notificación personal de los codemandados - 12 de noviembre de 2021-. Petición a la que previamente le antecedió el memorial del 14 de febrero del 2022, en el que el mismo profesional del derecho le solicitaba al Juez que impartiera el trámite subsiguiente, atendiendo a que el contradictorio ya había sido plenamente integrado.

2. Del auto impugnado. En auto del 11 de mayo del 2023 el juez denegó la petición de la nulidad clamada, reconociendo que, si bien existe

mora en el trámite del proceso, ello no resulta atribuible al actuar del hoy titular del despacho ni a su equipo de trabajo, sino a la alta demanda de administración de justicia que actualmente tiene el municipio de Caldas. Igualmente, aduce que, acceder a la consecuencia de la falta de competencia implicaría un traumatismo mayor para el proceso, mientras se define quién deberá conocer del asunto, máxime cuando en dicha municipalidad es el único juzgado que atiende la especialidad civil, por lo que *“a la luz de las garantías de acceso a la administración de justicia, tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso con duración razonable, se muestra como una solución más célere, eficiente y garante de los fines del proceso, impulsar este asunto y proseguir con el surtimiento de las actuaciones pendientes”*.

En esa misma providencia, requirió al apoderado de la parte actora para que acompañara la constancia de recibido de la notificación a la codemandada Rápido Transportes La Valeria S.A.

3. De la alzada. En la oportunidad procesal pertinente, el apoderado interpuso recurso de apelación, señalando que los argumentos de la mora que alude la autoridad judicial no resultan de recibo. En primer lugar, porque la nulidad prevista en el artículo 121 del C.G.P es objetiva y, de otro lado, las limitaciones de personal y recursos no puede ser trasladadas al ciudadano, máxime cuando en este proceso no se profiere actuación procesal desde el 17 de noviembre del 2021 hasta el 11 de mayo del 2023. Incluso, porque antes de que se solicitara la nulidad, en marzo del 2023 el juzgado tuvo alrededor de un año y medio para continuar con la etapa procesal respectiva, a saber, la fijación de una fecha para celebrar la audiencia inicial, sin embargo, guardó silencio al respecto.

Asimismo, manifiesta que, decretar la nulidad interpuesta no contraría la tutela jurisdiccional efectiva o el debido proceso con duración razonable porque *“el decreto de la nulidad no obliga a empezar desde cero las diligencias procesales, ni mucho menos significa un desistimiento de las pretensiones de la demanda, y porque lo que se busca, es justamente que el trámite sea resuelto por otro juzgado que pueda darle al proceso una duración razonable”*.

II. CONSIDERACIONES.

1. Procedencia del recurso de apelación. El artículo 321 del C.G.P establece en el numeral 6 que será apelable el auto que *“niegue el trámite de una nulidad procesal y el que la resuelva”*, por lo tanto, es susceptible del mecanismo vertical, el auto que rechaza de plano una nulidad procesal y el que decida la solicitud, bien sea decretando la nulidad o negándola.

2. Sobre la nulidad procesal. La nulidad procesal es considerada como una figura que tiene por finalidad remediar y subsanar los vicios acaecidos en el curso de un trámite jurisdiccional, mismos que causan una violación directa a los derechos al debido proceso y, para casos como el que nos ocupa, en donde está en juego el derecho fundamental de defensa, siendo posible sostener que, más que una sanción, dicha institución buscar asegurar el cumplimiento de los ritos procesales, instituyéndose una serie de causales que el legislador, en su libertad de configuración legislativa, ha consagrado con carácter taxativo en pro de su estimación.

Así mismo, es importante resaltar que de acuerdo con lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 121 del C.G.P, el que establece que las actuaciones que se adelanten una vez vencido el término de duración del proceso quedarán afectadas de nulidad, sin embargo, como dicha norma fue objeto de control de constitucionalidad en sentencia C-443 del 2019, se dejó claro que la nulidad originada por actuar una vez vencido el término de duración del proceso era saneable, por lo que debía alegarse por las partes hasta antes de dictar sentencia, mientras que la pérdida de competencia por vencimiento de término de duración del proceso sólo opera mediando solicitud de parte, sin perjuicio de la obligación del juez de darle aviso a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Sobre el tema, me permito citar al Doctrinante Henry Sanabria Santos, quien en su obra Derecho Procesal Civil General¹, indicó:

¹ Derecho procesal civil. Henry Sanabria Santo-Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2021 Pág. 908

“Así las cosas, estamos en presencia de una nulidad saneable: ello implica que, una vez vencido el término de duración del proceso, le corresponde a la parte solicitar tanto la pérdida de competencia como la nulidad de las actuaciones que se realizaron de manera extemporánea, pues la actuación sin alegar la nulidad genera saneamiento de esta. Igualmente, que se profiera sentencia sin hacerlo, es decir, sin alegar la nulidad, genera su saneamiento, de suerte que deben las partes estar atentas a solicitar el decreto de la invalidez de lo actuado una vez vencido el término del proceso, dado que actuar sin hacerlo genera la subsanación del vicio.

Aunado a lo anterior, y al compartir líneas de pensamiento con la norma adjetiva ya citada, resulta importante traer a colación lo dicho por la H. Corte Suprema de Justicia en providencia SC845 del 25 de mayo de 2022, con ponencia del Magistrado Luis Alonso Rico Puerta, veamos:

Expresado de otro modo, la –potencial– invalidación de las actuaciones ulteriores del funcionario que perdió competencia emerge como remedio a una irregularidad muy puntual, consistente en que, contrariando las directrices del ordenamiento, dicho fallador persista en tramitar el proceso, perdiendo de vista la realización del supuesto de pérdida de competencia del artículo 121 –lo cual supone el fenecimiento del término de duración de la instancia, sumado al respectivo alegato de parte–.

Sin embargo, debe insistirse en que la efectiva anulación de «la actuación posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia» no depende solamente de que se produzcan los hechos tipificados en el artículo 121, sino también de que alguna de las partes pida que la nulidad se declare, porque siendo esa irregularidad saneable, quedará convalidada si no se invoca antes de que se emita la sentencia respectiva.

Esa consecuencia, expresamente contemplada en la declaratoria de exequibilidad condicionada del inciso sexto del aludido canon 1219, pero implícitamente contemplada en el texto legal original –según lo expuesto supra–, está relacionada con los supuestos de saneamiento previstos en los numerales 1 y 4 del artículo 136 del Código General del Proceso, porque (i) quien podía proponer la nulidad «no lo hizo oportunamente», y (ii) al dictarse la sentencia «el acto procesal cumpl[e] su finalidad [la solución del conflicto] y no se viol[a] el derecho de defensa».

3.1. A partir de los razonamientos expuestos, es posible identificar tres escenarios distintos, relacionados con el supuesto que consagra el artículo 121 del Código General del Proceso:

(i) Si el término de duración del proceso fenece, pero el fallo es dictado antes de que cualquiera de las partes alegue dicha circunstancia, la pérdida de competencia no habría operado y, por lo mismo, la actuación posterior al vencimiento no estaría viciada de nulidad.

(ii) Si se dan ambas variables, es decir, vencimiento del término y alegato de parte, el juez o magistrado perderá competencia y sus actuaciones subsiguientes estarán viciadas de nulidad. Sin embargo, el vicio quedará saneado si ninguna de las partes solicita la invalidación antes de que se dicte la sentencia, pudiendo hacerlo.

(iii) Para que no se produzca el saneamiento, se debe alegar la nulidad de «la actuación posterior que realice el juez [o magistrado] que haya

perdido competencia» antes de que dicho funcionario dicte la sentencia; pero, en este escenario, las partes habrán de estarse a lo que dispongan los falladores ordinarios acerca de la invalidación del trámite.

2. Del caso concreto. El asunto para resolver por la Sala de Decisión se circunscribe a determinar si -como lo solicita la parte recurrente-, que en el presente proceso debe declararse la nulidad por vencimiento de términos, o, en caso contrario, si le asiste razón al Juzgador de primer grado cuando estimó que no lograba consolidarse la nulidad reglada por el art. 121 del CGP, porque si bien ha existido mora en el trámite del proceso, no obstante, declarar la nulidad, generaría un efecto traumático para el apelante, interrogante que el Tribunal despachará de manera desfavorable a los postulados expuestos por el *a quo*, como pasa a exponerse.

2.1 En providencia del 19 de agosto del 2020 se admitió la acción de responsabilidad civil formulada por el apoderado de la parte demandante en contra de los señores Darwin Alexis Vélez, Luis Ángel Gallego Castaño, Rápido Transportes La Valeria y La Equidad Seguros Generales. El apoderado de la parte actora cumplió con las notificaciones de cada uno de los codemandados, incluso la de la empresa de transporte y, prueba de ello, es que, en providencia del 15 de diciembre del 2020, se entendió que la notificación se había surtido para ese entonces en los términos del artículo 8 del Decreto 806 del 2020, de allí que no se comprende el por qué nuevamente el juzgado en el auto que fue objeto de apelación, requiere al apoderado de la parte actora para que allegue constancia de recibido del correo electrónico, cuando ya existió una actuación previa por parte de la misma entidad, en la que se avizora que dicha etapa procesal ya estaba más que agotada.

2.2. De otro lado, también se avizora que la última notificación de uno de los codemandados, como lo es la del señor Luis Ángel Gallego Castaño, se surtió el día 12 de noviembre del 2021, transcurriendo alrededor de 2 años sin que el juez realizara actuación alguna, o, en su defecto, hiciera uso de la facultad de prorrogar la instancia en los términos que establece el artículo 121 del C.G.P, más aún, cuando el mismo recurrente en memorial del 14 de febrero del 2022, antes del vencimiento de términos, le puso de presente la necesidad de impulsar el proceso, petición frente a la que no realizó

manifestación alguna, y esperó aproximadamente un año más para proferir el auto del 11 de mayo del 2023, con ocasión de la solicitud de nulidad por falta de competencia que elevó el apoderado en memorial del 7 de marzo del 2023, lo que, en consecuencia, acredita que los supuestos para declarar la nulidad se encuentran plenamente configurados, si se tiene en cuenta que, el término de un año con el que el juzgador contaba para dictar sentencia de primera instancia inició desde el mes de noviembre del 2021 sin que a la fecha hubiese estudiado su acaecimiento.

2.3. Adicionalmente, la nulidad alegada no fue saneada por actuación posterior del recurrente, en el sentido que pueda decirse, que la convalidó, ya que, cuando el demandante la formuló, el juez no se había pronunciado, y cuando lo hizo en auto del 11 de mayo del 2023 inmediatamente el apoderado cuestionó el auto que rechazó la nulidad, y que hoy es el que se estudia. De tal manera que el demandante en ningún momento ha consentido o en su defecto saneado la patología invocada.

2.4. Finalmente, no desconoce actualmente este magistrado que una gran parte de los Juzgados que integran la Rama Judicial y en especial el del Juzgado Civil del Circuito de Caldas, se encuentran plenamente congestionados con ocasión de la carga laboral y la falta de personal en el desarrollo propio de las funciones. Sin embargo, lo cierto es que dicha falencia administrativa no puede afectar los derechos de los usuarios que requieren la prestación oportuna del servicio de justicia, y más en este caso, cuando el juez tenía la facultad de prorrogar la competencia, y aún así no lo hizo.

En ese orden de ideas, no resulta necesario esgrimir mayores elucubraciones que las descritas y, por el contrario, se advierte entonces que, se comparten los argumentos que vienen siendo esgrimidos por el extremo recurrente, pues sometido el *factum* aducido como detentador del recurso de apelación, logra evidenciarse su correspondencia, lo que para el caso se traduce en la revocatoria del proveído recurrido, por cuanto la nulidad que ahora se pide si logró consolidarse, conforme se expuso en las líneas precedentes.

De esta manera, y por las razones expuestas, el **Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, Sala Unitaria Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el auto apelado, de fecha 11 de mayo del 2023, proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Caldas, ello, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Ordenar al Juzgado que proceda a realizar el trámite dispuesto en el párrafo segundo del artículo 121 del C.G.P.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.

**JULIÁN VALENCIA CASTAÑO
MAGISTRADO**

Firmado Por:

Julian Valencia Castaño

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 010 Civil

Tribunal Superior De Medellín - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **3f17d62221bfd30bcabefc6db7552cc5ba33cab1f5c068f79d3e582811e1e396**

Documento generado en 27/02/2024 03:43:56 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>